

# El privatizador que los privatece ...

La vocación del presente régimen por devolver algunas de las empresas estatales al sector privado es innegable, y sus decisiones al respecto se remontan a los primeros Cónclaves.

Sin embargo, así como es firme, la vocación ha resultado frustrada. La única privatización significativa que se operó desde junio de 1973 fue la de AMDET, en una órbita que la mayor parte de los observadores situarían fuera del ámbito típico del régimen "cívico-militar".

En cierto sentido es un tremendo fracaso de ese régimen. Queremos decir, si los propios objetivos suministran criterios adecuados para juzgar sobre los resultados conseguidos. Considérense, sin ir más lejos, las dos metas que el gobierno se propuso recientemente, bajar el gasto público y privatizar algunas empresas, para lo cual a principios de este año nombró sendas comisiones o grupos de trabajo. En lugar de bajar, el gasto público, según estimaciones a setiembre que publicamos la semana pasada, subió este año, en términos reales, cerca de un 10 %. En cuanto a las privatizaciones, todo lo que ha trascendido de los trabajos de la comisión respectiva es un barrunto de que tal vez, quizá, se privatece ILPE, una miniempresa gubernamental, que emplea 700 de los 55 mil funcionarios que abarrotan las planillas de trabajo del Estado empresario, según datos de SEPLACODI a 1981.

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de esta inoperancia,

que como tal debemos calificar a falta de resultados, visto que el gobierno asegura que sí quiere privatizar algunas —aunque no sepamos aún bien cuáles— de sus empresas?

Por supuesto, una manera sencilla de responder consiste en afirmar que la tarea es difícil, lo que sin duda es el caso. Pero aquí trataremos de ir un poco más hondo.

La razón más obvia consiste en que los 55 mil funcionarios del sector hacen fuerza. Los de cada empresa (v. gr. los 9.900 de AFE, los 6.500 de ANCAP, los 4.600 de ANP, los 11.000 de UTE, los 8.100 de ANTEL) forman otros tantos **lobbies** bien compactos. El poder de estos grupos de presión puede inferirse a partir de la influencia que está ejerciendo últimamente el de ILPE. Consejeros de Estado han salido a la televisión en estado de alarma, para referirse a la suerte inmenorable que están a punto de correr los 700 funcionarios de ILPE. Los mismos Consejeros que habían visto a 70.000 trabajadores del sector privado perder sus empleos en el último año, no diremos por cierto que con indiferencia, pero al menos manteniendo sus inquietudes "in pectore".

La segunda razón concierne lo que podría llamarse el síndrome del "nuevo administrador de empresa pública". Este personaje no tiene, en materia de dirección de empresas, ni experiencia ni adiestramiento profesional.

Le pasa, en esa materia, lo mismo que en cirugía. Pero mientras rechazaría horrorizado la sugestión de que practicara una sencilla apendectomía, acepta la dirección de una empresa con miles de empleados y una cifra anual de ventas de varios miles de millones de pesos, como la cosa más natural. Siente dentro de su pecho que ésta es, por fin, la actividad para la que ha nacido. Y apenas entra en funciones encuentra confirmada su primigenia convicción en lo claro que ve lo mal que han dejado las cosas sus predecesores en el cargo. Este personaje se transforma en un defensor a ultranza de la empresa pública y por el principio de que ésta puede ser al menos tan eficiente como la empresa privada, se deja matar. Hay, lo sabemos por reiterada experiencia, un solo argumento capaz de hacerle mella. Consiste en mirarle fijo a los ojos y preguntarle de súbito: "¿qué va a pasar con la empresa el día que usted tenga que irse?". Invariablemente, después de algún titubeo y a regañadientes, termina por reconocer que entonces sí, efectivamente, podría haber ciertas dificultades.

La tercera razón surge de una combinación de las dos primeras. El **lobby** de funcionarios actúa sobre el nuevo administrador. El nuevo administrador, con sus condiciones, y su empeño, puede restaurar la eficiencia de la empresa y salvar los puestos de trabajo consiguientes.

El nuevo administrador de-

sea fervientemente poder ayudar a su personal. Todo lo que necesita es tiempo, y unos pocos millones de dólares para las inversiones más impostergables.

Dicho sea de paso, el administrador privado siente lo mismo, pero encuentra más difícil (si bien no imposible, en este tiempo de refinanciaciones y compras de Carteras por el Banco Central) hacer que el contribuyente le banque los buenos sentimientos.

Pero la razón fundamental y subyacente a todas, es localizable fuera del sector público. Concierne una característica idiosincrática de los uruguayos: su fatalismo.

El fatalismo ayuda a sobrellevar las amarguras de la vida. Ponga que usted quiere teléfono, y no lo consigue; o el que tiene se descompone cada vez que llueve; o sobreviene un apagón —¡otro más!— cuando, agotado, iba a tomar el ascensor de su edificio en ruta hacia su butaca favorita; o el medidor del surtidor de nafta le recuerda, a fin de mes, que el combustible en el Uruguay cuesta más del doble que en cualquier otro sitio. En todas estas circunstancias el fatalismo —es decir, la convicción de que las cosas son ineluctablemente como son, y seguirán siéndolo, porque **así están escritas** en el libro del destino— se convierte en una gran fuente de consuelo. Basta, para convencerse, con mirar a algún ejemplar atípico, como todos conocemos y ver lo irritado que le ponen todas estas cosas.

O diga usted que se entera de que el conjunto de las empresas industriales del Estado reclaman en conjunto una asistencia financiera media neta de más de 50 millones de dólares al año, lo que significa más endeudamiento externo, o más impuestos, o mayor pérdida de reservas, o más inflación, de los que tendríamos sin ellas. O que se entera de que la pérdida operativa de AFE viene creciendo más de 8 % por año y ya pasó la marca de los 400 millones de pesos anuales, o de que la fuerte inversión de PLUNA en 1978 cambió un pequeño superávit corriente en un déficit operativo apreciable; o suponga que usted tiene que pagar al BSE la cuenta por el seguro de accidentes del trabajo, cuyo precio, pese a tratarse de un seguro a la vez obligatorio y monopolizado, es fijado **ad libitum** por el monopolista. En todas estas emergencias, el fatalismo proporciona una ayuda espiritual invaluable.

Eso sí, fuerza es reconocer que no ayuda a cambiar las cosas. Si todos creen que las cosas son así por disposición de los Hados, así son y serán efectivamente. El fatalismo se cuenta por ello entre las profecías autorrealizables. Nosotros mismos estamos empezando a creer que ANCAP, UTE, ANTEL, PLUNA, ANP y demás, permutaciones de la sopa de letras burocráticas están escritos con caracteres indelebiles en el libro del destino uruguayo. ¿Usted no?